

Traducción

Tribunal Superior Regional de Hamm

Resolución

III-4 Ws 143/24 Tribunal Regional Superior de Hamm

3 GWs 184/24 Fiscalía General de Hamm

6 KLS 2/22 Tribunal Regional de Bochum

365 Js 335/12 Fiscalía de Bochum

Caso penal

Contra Werner Mauss

Abogados defensores: El letrado Prof. Dr. Ulrich Sommer,
Neusser Straße 99, 50670 Cologne

El letrado Torsten Hildebrandt,
Meinekestraße 4, 10719 Berlin,

El letrado Gregor J. Schneider,
Bavariaring 35, 80336 Munich,

Por evasión fiscal, entre otros

(en este caso: recurso interpuesto por la Fiscalía contra la suspensión
del procedimiento con arreglo al artículo 396 de la Ley General Tributaria
- AO)

En respuesta al recurso interpuesto por la Fiscalía de Bochum el 29 de enero de
2024 contra la sentencia de la Sala Sexta de lo Penal de gran instancia del Tribunal
Regional de Bochum, de fecha 28 de agosto de 2023, la Sala Cuarta de lo Penal del
Tribunal Regional Superior de Hamm, el 8 de octubre de 2024, a través de

el juez presidente Prof. Dr. Saal del Tribunal Regional Superior,
el juez Jaspers del Tribunal Regional Superior y
el juez Tewes del Tribunal Regional Superior,

tras escuchar las alegaciones de la Fiscalía General de Hamm y del acusado,
respectivamente, de su abogado defensor,

decidió lo siguiente:

Se desestima por infundado el recurso interpuesto por la Fiscalía de Bochum.

Las costas del procedimiento de recurso, incluidos los gastos necesarios en que haya incurrido el demandado a este respecto, correrán a cargo del erario público.

Razones:

I.

En el escrito de acusación presentado por la Fiscalía de Bochum el 9 de junio de 2016, se imputa al acusado la evasión fiscal en doce casos, dos de los cuales quedaron en fase de tentativa. Se le imputa haber incumplido, en violación de sus obligaciones, durante el periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2003 y el 23 de marzo de 2015, su deber de comunicar a la oficina tributaria de Essen-Süd, que tiene jurisdicción sobre él, que, desde la década de 1980, se habían realizado numerosas inversiones por un importe total de entre 26 y 60 millones de dólares estadounidenses a su nombre en el USB Bank de Luxemburgo y las Bahamas, y que dichas inversiones habían generado importantes rendimientos de capital.

En una sentencia dictada por el Tribunal Regional de Bochum el 5 de octubre de 2017, tras la desestimación parcial de los cargos, el acusado fue condenado a una pena total de dos años de prisión por evasión fiscal en diez cargos, cuya ejecución quedó suspendida con libertad condicional.

En respuesta a los recursos interpuestos por el acusado y la Fiscalía, el Tribunal Federal de Justicia, en su sentencia de 10 de enero de 2019 (asunto n.º 1 StR 347/18), anuló la sentencia del Tribunal Regional de Bochum y las conclusiones en ella contenidas, y remitió el asunto a otra sala de delitos económicos del Tribunal Regional de Bochum para que se celebrara un nuevo juicio y se dictara una nueva resolución.

En consecuencia, el Tribunal Regional de Bochum - ahora la Sala Sexta de lo Penal

de gran instancia - suspendió el procedimiento con arreglo al artículo 396 del Código Fiscal hasta que se resuelva definitivamente el procedimiento fiscal, mediante el auto impugnado de fecha 28 de agosto de 2023.

La Fiscalía de Bochum interpuso un recurso contra esta resolución mediante escrito de 29 de enero de 2024.

En su escrito presentado el 10 de junio de 2024, la Fiscalía General del Estado de Hamm se adhirió al recurso y solicitó la anulación de la resolución impugnada del Tribunal Regional de Bochum de 28 de agosto de 2023.

A través de sus abogados defensores, el acusado presentó alegaciones escritas el 8 de marzo de 2024 y el 5 de agosto de 2024 en relación con el recurso interpuesto por la Fiscalía y la solicitud presentada por la Fiscalía General.

II.

La cuestión de si el recurso interpuesto por la Fiscalía de Bochum es admisible puede dejarse abierta, ya que, en cualquier caso, el recurso carece de fundamento en cuanto al fondo.

En el auto impugnado, el Tribunal Regional decidió - de forma que no es objetable desde el punto de vista jurídico y con la debida motivación - suspender el proceso penal, de conformidad con el artículo 396 del Código Fiscal, hasta que el procedimiento tributario haya concluido definitivamente.

Se cumplen los requisitos de esta disposición. En el presente caso, determinar si los hechos imputados al acusado constituyen evasión fiscal depende de si existe una deuda tributaria y de si se han pagado menos impuestos de los debidos. Además, el procedimiento de liquidación tributaria pendiente - que se está tramitando actualmente ante el Tribunal Fiscal de Düsseldorf - aún no se ha resuelto definitivamente.

A la hora de calificar los hechos como evasión fiscal en el presente caso, la cuestión preliminar decisiva de derecho tributario planteada por el Tribunal Regional es en qué medida la singularidad - tal y como la ha caracterizado correctamente el Tribunal

Regional - de la actividad profesional del demandado como agente secreto, así como la singularidad del «fondo secreto» puesto a su disposición para este fin, influyen en la cuestión de si el Estado tiene un derecho de recaudación y si el demandado tiene la correspondiente obligación de declarar. A este respecto, se trata de una cuestión de derecho y no de la aplicación de las disposiciones vigentes del Derecho fiscal.

El demandado alega - de forma detallada y citando numerosas pruebas - que los activos en cuestión constituyen un fondo fiduciario («capital social») perteneciente a organismos de seguridad occidentales. El fideicomitente es un Estado extranjero, y el fideicomiso es administrado por el servicio de inteligencia exterior de dicho Estado. El fondo se constituyó - con el conocimiento de las autoridades de seguridad alemanas - a su nombre con fines de ocultación. Utilizó el fondo según lo acordado para financiar sus operaciones como agente secreto y no se le permitió revelar la existencia del fondo a terceros. La ocultación sirvió para proteger a las instituciones estatales así como a la vida y la integridad física del agente secreto, su familia y otros empleados secretos. Las autoridades de seguridad habían registrado el fondo ante las autoridades fiscales, y los fondos no habían sido gravados.

Según esto, el presente caso es uno en el que, por un lado, los intereses del Estado en mantener el secreto sobre los flujos de efectivo relacionados con actividades de inteligencia entran en conflicto con la reclamación tributaria del Estado.

Los efectos de las obligaciones de secreto de Estado que prevalecen sobre las reclamaciones tributarias están parcialmente regulados en otros ámbitos. Por ejemplo, el artículo 1, apartado 1, frase 3, del Reglamento sobre las notificaciones a las autoridades fiscales por parte de otras autoridades y de los organismos públicos de radiodifusión (Reglamento de Notificación) establece que las autoridades que, en general, están obligadas a revelar información, no están obligadas a revelarla a las autoridades fiscales si existe el riesgo de que la divulgación del contenido de la información resulte perjudicial para el bienestar del Gobierno federal o de un Estado federado. Existen asimismo acuerdos entre las máximas autoridades fiscales federales y de los estados federados que datan de 1963 y que fueron confirmados por última vez en 1998 (citados en el documento impreso del Bundestag n.º 16/8447, p. 16), que establecen que las cantidades abonadas a los informantes del Servicio Federal de Inteligencia por la transmisión de datos de relevancia fiscal procedentes

de Liechtenstein se tratan a efectos fiscales de tal manera que, en dichos casos, los organismos públicos abonan a las autoridades fiscales de los distintos estados federados un importe a tanto alzado en concepto de impuesto sobre la renta equivalente al 10 % del importe de la bonificación. Por razones de confidencialidad, los propios informantes no están obligados a presentar ninguna declaración ante las autoridades fiscales.

Aunque las autoridades fiscales están sujetas al secreto fiscal, las normas antes mencionadas muestran que esta obligación de confidencialidad para proteger un interés estatal superior en el secreto no se considera suficiente. Más bien, en tales casos, el interés en el secreto prevalece hasta tal punto que la reclamación tributaria del Estado o su interés en la correcta declaración de los hechos relevantes a efectos fiscales deben quedar en segundo plano.

En el presente proceso penal, a la luz de todo lo anterior, la cuestión decisiva es si, de conformidad con este principio jurídico, debe negarse desde el principio la existencia de una obligación tributaria o de la correspondiente obligación de declaración fiscal por parte del agente - incluso en el caso de un agente secreto - debido a obligaciones de secreto de Estado de carácter superior. En opinión del Senado, se trata de una cuestión jurídica abstracta relevante para la resolución, que debe ser respondida por los tribunales especializados de la jurisdicción fiscal.

No se aprecian otros errores en el ejercicio de la facultad discrecional del Tribunal Regional.

Por las razones expuestas anteriormente, la resolución del Tribunal Regional de Bochum de 28 de agosto de 2013 no es objetable desde el punto de vista jurídico y, por lo tanto, tampoco es susceptible de recurso (véase, en relación con la no impugnabilidad, Jäger en: Joecks/Jäger/Randt, Derecho Penal Tributario, 9.^a edición, 2023, § 396 AO, nota al margen 51; Drüen en: Tipke/Kruse, AO/FGO, estado del documento: 177.^a entrega, 9/2023, estado del trabajo: 181. N.º 5/2024, § 396 AO, nota al margen 62; Schaefer en: BeckOK AO, 28.^a edición, a 15 de abril de 2024, § 396 AO, nota al margen 55).

III.

La resolución sobre las costas se basa en el artículo 473, apartados 1 y 2, del Código de Procedimiento Penal.

Prof. Dr. Saal

Jaspers

Tewes

Hecho

Hartmann, empleada judicial

En calidad de secretario del registro judicial

Ausfertigung



Oberlandesgericht Hamm

Beschluss

III-4 Ws 143/24 OLG Hamm

3 GWs 184/24 GStA Hamm

6 KLS 2/22 LG Bochum

365 Js 335/12 StA Bochum

Strafsache

g e g e n

Werner Mauss,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Verteidiger: Rechtsanwalt Prof. Dr. Ulrich Sommer,
Neusser Straße 99, 50670 Köln,

Rechtsanwalt Torsten Hildebrandt,
Meinekestraße 4, 10719 Berlin,

Rechtsanwalt Gregor J. Schneider,
Bavariaring 35, 80336 München,

w e g e n

Steuerhinterziehung u.a.

(hier: Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen die Aussetzung des Verfahrens gemäß § 396 AO).

Auf die Beschwerde der Staatsanwaltschaft Bochum vom 29. Januar 2024 gegen den Beschluss der 6. großen Strafkammer des Landgerichts Bochum vom 28. August 2023 hat der 4. Strafsenat des Oberlandesgerichts Hamm am 8. Oktober 2024 durch

den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Prof. Dr. Saal,
den Richter am Oberlandesgericht Jaspers und
den Richter am Oberlandesgericht Tewes

nach Anhörung der Generalstaatsanwaltschaft Hamm und des Angeklagten bzw. seiner Verteidiger

b e s c h l o s s e n :

Die Beschwerde der Staatsanwaltschaft Bochum wird als unbegründet verworfen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der insoweit entstandenen notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt die Staatskasse.

Gründe:

I.

Dem Angeklagten wird durch Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Bochum vom 9. Juni 2016 Steuerhinterziehung in zwölf Fällen vorgeworfen, wobei es in zwei Fällen beim Versuch blieb. Ihm wird zur Last gelegt, in der Zeit vom 13. Oktober 2003 bis zum 23. März 2015 pflichtwidrig dem für ihn zuständigen Finanzamt Essen-Süd nicht angegeben zu haben, dass auf seinen Namen bei der USB-Bank in Luxemburg und auf den Bahamas seit den 1980er Jahren zahlreiche Vermögensanlagen in Höhe von

insgesamt zwischen 26 und 60 Millionen USD angelegt sind und dass sich aus diesen Vermögensanlagen erhebliche Kapitaleinkünfte ergeben haben.

Durch Urteil des Landgerichts Bochum vom 5. Oktober 2017 wurde der Angeklagte daraufhin nach teilweiser Verfahrenseinstellung im Übrigen wegen Steuerhinterziehung in zehn Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Auf die Revisionen des Angeklagten und der Staatsanwaltschaft hat der Bundesgerichtshof durch Urteil vom 10. Januar 2019 (Aktenzeichen 1 StR 347/18) das Urteil des Landgerichts Bochum mit den zugehörigen Feststellungen aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Bochum zurückverwiesen.

Daraufhin hat das Landgericht Bochum – nun die 6. großen Strafkammer – durch den angefochtenen Beschluss vom 28. August 2023 das Verfahren gemäß § 396 AO bis zum rechtskräftigen Abschluss des Besteuerungsverfahrens ausgesetzt.

Gegen diesen Beschluss hat die Staatsanwaltschaft Bochum durch Schreiben vom 29. Januar 2024 Beschwerde eingelegt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Hamm ist in ihrer Antragsschrift vom 10. Juni 2024 der Beschwerde beigetreten und beantragt, den angefochtenen Beschluss des Landgerichts Bochum vom 28. August 2023 aufzuheben.

Der Angeklagte hat durch seine Verteidiger durch Schreiben vom 8. März 2024 und vom 5. August 2024 zu der Beschwerde der Staatsanwaltschaft und der Antragsschrift der Generalstaatsanwaltschaft Stellung genommen.

II.

Die Zulässigkeit der Beschwerde der Staatsanwaltschaft Bochum kann dahingestellt bleiben, denn die Beschwerde ist jedenfalls in der Sache unbegründet.

Das Landgericht hat durch den angefochtenen Beschluss in rechtlich nicht zu beanstandender Weise und mit zutreffender Begründung beschlossen, das Strafverfahren gemäß § 396 AO bis zum rechtskräftigen Abschluss des Besteuerungsverfahrens auszusetzen.

Die Voraussetzungen dieser Vorschrift liegen vor. Vorliegend hängt die Beurteilung der dem Angeklagten vorgeworfenen Taten als Steuerhinterziehung davon ab, ob ein Steueranspruch besteht und ob Steuern verkürzt worden sind. Auch ist das anhängige - sich mittlerweile im Klageverfahren vor dem Finanzgericht Düsseldorf befindliche - Besteuerungsverfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen.

Bei der Beurteilung der Taten als Steuerhinterziehung kommt es vorliegend auf die vom Landgericht aufgeworfene entscheidungserhebliche steuerrechtliche Vorfrage an, inwieweit die - vom Landgericht mit Recht so bezeichnete - Einzigartigkeit der beruflichen Tätigkeit des Angeklagten als Geheimagent sowie auch die Einzigartigkeit des ihm hierfür überlassenen „Geheimfonds“ sich auf die Frage des Bestehens eines Steueranspruchs des Staates und eine entsprechende Erklärungspflicht des Angeklagten auswirken. Es handelt sich insoweit um eine Rechtsfrage und nicht um Rechtsanwendung bestehender steuerrechtlicher Vorschriften.

Der Angeklagte lässt sich – detailreich sowie unter Benennung zahlreicher Beweismittel – dahingehend ein, es handele sich bei dem in Rede stehenden Vermögen um einen Treuhandfonds („Kapitalstock“) westlicher Sicherheitsbehörden. Treugeber sei ein ausländischer Staat, ausgeübt werde die treugeberische Verwaltung durch den Auslandsgeheimdienst dieses Staates. Der Fonds sei - mit Kenntnis deutscher Sicherheitsbehörden – zum Zwecke der Tarnung auf seinen – des Angeklagten – Namen angelegt worden. Er habe den Fonds absprachegemäß zur Finanzierung seiner operativen Einsätze als Geheimagent genutzt und die Existenz des Fonds Dritten gegenüber nicht offenlegen dürfen. Die Tarnung habe dem Schutz staatlicher Institutionen sowie dem Schutz von Leib und Leben des

Geheimagenten nebst seiner Familie und weiterer geheimer Mitarbeiter gedient. Die Sicherheitsbehörden hätten den Fonds bei den Finanzbehörden angemeldet, eine Versteuerung der Mittel sei nicht erfolgt.

Hiernach handelt es sich vorliegend um einen Fall, in dem einerseits staatliche Geheimhaltungsinteressen betreffend Geldflüsse im Zusammenhang mit geheimdienstlicher Tätigkeit und andererseits der staatliche Steueranspruch miteinander in Konflikt stehen.

Die Auswirkungen übergeordneter staatlicher Geheimhaltungspflichten gegenüber Steueransprüchen sind in anderen Bereichen teilweise geregelt. So ist etwa in § 1 Abs. 1 S. 3 der Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten (Mitteilungsverordnung - MV) vorgesehen, dass für grundsätzlich mitteilungspflichtige Behörden eine Verpflichtung zur Mitteilung an die Finanzbehörden dann entfällt, wenn die Gefahr besteht, dass das Bekanntwerden des Inhalts der Mitteilung dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde. Auch gibt es Vereinbarungen der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder aus dem Jahr 1963, zuletzt bestätigt im Jahr 1998 (zitiert in BT-Drucksache 16/8447 S. 16), die regeln, dass Beträge, die an Informanten des Bundesnachrichtendienstes für die Übermittlung steuerrelevanter Daten aus Liechtenstein gezahlt werden, steuerlich so behandelt werden, dass staatliche Stellen in diesen Fällen einen pauschalen Einkommensteuerbetrag in Höhe von 10 Prozent der Prämiensumme an die Finanzkassen der einzelnen Bundesländer abführen. Auf eine Erklärung durch die Informanten selbst gegenüber Finanzbehörden wird aus Geheimhaltungsgründen verzichtet.

Auch wenn Finanzbehörden an das Steuergeheimnis gebunden sind, zeigen die vorgenannten Regelungen, dass diese Schweigepflicht zum Schutz eines überragenden staatlichen Geheimhaltungsinteresses als nicht ausreichend angesehen wird. Vielmehr überwiegt in solchen Fällen das Geheimhaltungsinteresse derart, dass der staatliche Steueranspruch bzw. das staatliche Interesse an ordnungsgemäßer Erklärung steuerrechtlich relevanter Sachverhalte dahinter zurücktreten müssen.

Für das vorliegende Strafverfahren ist nach alledem die Frage maßgeblich, ob entsprechend diesem Rechtsgedanken wegen übergeordneter staatlicher Geheimhaltungspflichten auch im Falle eines Geheimagenten eine Steuerschuld bzw. eine entsprechende steuerrechtliche Erklärungspflicht des Agenten von vornherein zu verneinen ist. Hierbei handelt es sich aus Sicht des Senats um eine entscheidungserhebliche abstrakte Rechtsfrage, die durch die Fachgerichte der Finanzgerichtsbarkeit zu beantworten ist.

Fehler des Landgerichts bei der Ermessensausübung sind auch ansonsten nicht ersichtlich.

Aus den vorgenannten Gründen ist der Beschluss des Landgerichts Bochum vom 28. August 2023 rechtlich nicht zu beanstanden und daher im Ergebnis auch unanfechtbar (vgl. zur Unanfechtbarkeit Jäger in: Joecks/Jäger/Randt, Steuerstrafrecht, 9. Auflage 2023, § 396 AO Rn. 51; Drüen in: Tipke/Kruse, AO/FGO, Dokumentstand 177. Lieferung, 9/2023, Werkstand 181. Lieferung 5/2024, § 396 AO Rn. 62; Schaefer in: BeckOK AO, 28. Edition, Stand 15.4.2024, § 396 AO Rn. 55).

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 473 Abs. 1 und 2 StPO.

Prof. Dr. Saal

Jaspers

Tewes

Ausgefertigt

J. Hartmann

Hartmann, Justizbeschäftigte

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

